



Comunidad de Madrid

MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DE AULAS PREFABRICADAS, OBRAS PARA SU INSTALACION Y SERVICIOS TÉCNICOS ASOCIADOS, PARA IMPLANTAR DE 4 AULAS PREFABRICADAS EN EL CEIP LEGAZPI DE ARROYOMOLINOS COMO MEDIDA DE DISTANCIAMIENTO CONTRA EL COVID-19 MEDIANTE TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia internacional.

Esta enfermedad ha tenido un importante impacto en Europa, y particularmente en España, donde la aparición de casos y su escalada llevó al Sistema Sanitario al borde del colapso, por lo que hubo que adoptar medidas urgentes y sin precedentes recientes, con el objetivo de amortiguar el impacto del virus y sus imprevisibles consecuencias tanto sanitarias, como económicas y sociales.

Teniendo en cuenta que este nuevo virus tiene una gran capacidad de contagio entre la población y para el que actualmente no se dispone de medias medicas capaces de contener la enfermedad, la prevención junto con las medidas de higiene y distanciamiento social, se están convirtiendo en una de las más eficaces medidas de lucha contra la enfermedad.

Como principal vía de contagio, se ha detectado la vía aérea, y tiene además una alta capacidad de permanecer en superficies y objetos que, al contacto con ellas, se convierte también vía de contagio, concediéndose actualmente una relevancia fundamental a la transmisión de la enfermedad mediante los aerosoles.

Además, la capacidad de contagio del virus se da con carácter previo a la aparición de síntomas en el transmisor y, aunque afecta a todos los segmentos de población, es especialmente letal en personas con patologías previas o de avanzada edad, siendo los niños portadores, en muchas ocasiones asintomáticos.

En el ámbito educativo, ante la detección de los primeros casos en España, la Comunidad de Madrid comienza adoptando medidas en los centros docentes mediante la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).

En el artículo primero de esta Orden 338/2020, de 9 de marzo, se establece en el ámbito docente "La suspensión temporal de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, incluidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación", recomendado continuar las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y on-line.

Ante el progresivo avance de contagios, que se extiende a toda España y amenaza con colapsar el sistema sanitario nacional, se aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este Real decreto, entre otras medidas, suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, manteniendo las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y "online", siempre que resulte posible.





Ante la persistencia de la pandemia, el estado de alarma se ha visto prorrogado en sucesivas ocasiones hasta las 0.00 horas del día 21 de junio de 2020, según dispone el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.

Una vez finalizado el estado de alarma, y ante la necesidad de retomar la actividad en presencia del virus que puede dar lugar rápidamente a nuevos brotes, se publica el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

En el ámbito educativo, el artículo 9 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, establece que *"Las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de los centros docentes, públicos o privados, que impartan las enseñanzas contempladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan. (...)"*

Con la llegada del otoño se ha detectado una segunda ola de contagios, que ha motivado, inicialmente la adopción de diversas medidas de confinamiento territorial y que finalmente han concluido con la publicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

La preocupante la situación ante el comienzo del curso escolar 2020/21 que se inició de forma escalonada a partir del día 4 de septiembre, motivó a que en el ámbito educativo se adoptasen múltiples actuaciones de higiene y distanciamiento social dentro de los centros que garantizaran la vuelta al colegio de forma segura, siguiéndose recomendaciones *como el distanciamiento interpersonal de 1,5 metros, la higiene de manos y respiratoria, la ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro, así como una gestión adecuada y ágil ante la aparición de un caso.*

Dentro de estas medidas destaca especialmente la del distanciamiento para evitar la transmisión por vía aérea del virus, si bien esta medida está condicionada por la disponibilidad de espacios en los centros educativos.

La dotación de aulas adicionales de obra implica largos periodos de ejecución no resultan factibles ante el elevado riesgo de contagio, en cambio, existen otras alternativas *que permiten ampliar la superficie, de forma inmediata, como son las construcciones prefabricadas, que proporcionan actualmente una solución adecuada en calidad y disponibilidad ante la urgencia producida por el rebrote de casos de contagio.*

A parte del suministro de los módulos prefabricados, es preciso que, a su vez, se acometan obras de urbanización, obras auxiliares y de acondicionamiento, que aunque de menor cuantía económica que el suministro de los módulos prefabricados, son imprescindibles para permitir el pleno uso de los módulos prefabricados a instalar, por lo que en también se encuentran incluidas las obras auxiliares y de urbanización para la instalación de los módulos prefabricados en el interior de los colegios cuyas clases expandirían.

Dentro del marco normativo español, la contratación pública para casos de excepcionalidad está perfectamente reglada en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento





jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP). Así, el citado artículo 120 establece que:

"1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:

a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

(. . .)

c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario.(...)"

En el caso planteado del COVID-19, con efectos que lejos de remitir parecen rebrotar en múltiples puntos, se requieren actuaciones contundentes que eviten una situación como la vivida en los meses precedentes que dieron lugar a la declaración del estado de alarma y que se hacen especialmente urgentes por el grave peligro de contagio que implica el desarrollo del curso escolar sin las medidas de prevención adecuadas. La situación resulta especialmente grave y peligrosa, no solo por la naturaleza de la población afectada, sino también por su distribución territorial, lo que justifica la contratación de los medios necesarios bajo un régimen excepcional. La asociación de los efectos del COVID y la necesidad de hacer uso de medidas para la gestión eficiente de las Administraciones Públicas para combatirlo ya quedó puesta de manifiesto en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 que establecía que *"La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las entidades del sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, siendo de aplicación el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014"* lo que conducía a la asociación de grave peligro y existencia del COVID-19 en la sociedad de forma inequívoca al establecer *"todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia"*

Así, la contratación con empresas especializadas en la construcción prefabricada de aulas y con capacidad suficiente para poner en servicio la mayor cantidad de espacios posibles para su uso como expansión de las aulas, así como las obras auxiliares y





servicios técnicos se encontrarían justificadas por su carácter de necesarias para evitar un riesgo grave para la salud según lo dispuesto en el artículo 120 de la LCSP y en consecuencia susceptibles de su contratación sujeto a al carácter de tramitación de emergencia.

Este incremento del número de aulas como medida contra la propagación del virus tiene su precedente en el suministro de 135 aulas que por su volumen y la estructura del mercado requirió la contratación con varios proveedores para atender la necesidad en número de aulas y tiempos de suministro. A esta adquisición le siguió otra de 55 aulas de un cuarto fabricante, agotando buena parte de la capacidad del mercado. Posteriormente se añadieron 46 aulas mas según se detectó capacidad productiva del sector.

No obstante, sigue siendo necesario el incremento de aulas que garanticen el distanciamiento por lo que es necesario recurrir a una nueva contratación que al ser en el menor tiempo posible por el riesgo de contagio estaría incluida en la tramitación de emergencia que ampara el Real Decreto 7/2020.

La actuación que se considera necesaria consiste en la instalación de 4 aulas prefabricadas en el CEIP Legazpi de Arroyomolinos, si bien esta dotación podría verse alterada según la disponibilidad de espacio dentro del centro.

El importe de esta implantación que incluye el suministro de los módulos prefabricados, las obras auxiliares, urbanización y acondicionamiento, así como las actuaciones de carácter técnico necesarias, se estiman en 500.000 €

En consecuencia, la contratación de aulas prefabricadas, las obras para su instalación y servicios técnicos asociados, para su instalación en centros educativos como medida de distanciamiento contra el COVID- 19 es una necesidad sobrevenida y totalmente justificada que deriva las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia y ha de ser atendida con toda celeridad y urgencia, no siendo factible otra forma de contratación distinta a la tramitación de emergencia de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la LCSP y artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo.

Madrid, 17 de noviembre de 2020

EL DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCUTRAS Y SERVICIOS

Fdo.: Ignacio García Rodríguez

